

Sección internacional

ASUNTOS GENERALES

El Diálogo Norte-Sur, o lo que no fue

En los primeros días de junio se llevó a cabo la última reunión de la Conferencia sobre la Cooperación Económica Internacional (CCEI), más conocida como Diálogo Norte-Sur, que terminó con un virtual fracaso. Si se analizan desapasionadamente los problemas que se discutieron tanto en el transcurso de las deliberaciones como en el momento de las decisiones, se verá que el resultado era previsible. Sin embargo, no es tan fácil predecir las consecuencias altamente negativas que la frustración de París ejercerá sobre las relaciones económicas internacionales en el futuro más inmediato.

Antecedentes

El Diálogo Norte-Sur nació de una iniciativa del presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, para impedir o postergar un abierto enfrentamiento económico entre las naciones altamente industrializadas y los países subdesarrollados,

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifieste.

a raíz de los sucesos que siguieron a la crisis energética. Cuando se desató la guerra de Yom Kipur, en octubre de 1973, los países árabes declararon un boicót en el suministro de petróleo a Occidente, seguido de un gran aumento en los precios. Entonces, el secretario de Estado de Gerald Ford, Henry Kissinger, trató de organizar un frente de los países consumidores de energía, con el propósito aparente de defender sus intereses ante las naciones petroleras.

En realidad, la iniciativa de Kissinger era mucho más compleja de lo que parece. Como quedó demostrado a lo largo de múltiples análisis sobre el problema petrolero, el Gobierno estadounidense había respaldado plenamente el aumento en los precios del crudo.¹ El esfuerzo desplegado por el secretario de Estado para organizar a los consumidores frente a los productores no estaba en contradicción con esa política. El aumento de los precios del crudo permitió reconstituir parcialmente la competencia norteamericana en el mercado mundial, frente a Europa occidental y Japón, y acentuó la dependencia de los países subdesarrollados no productores de petróleo con respecto a los mercados financieros internacionales y a las entidades mundiales de crédito. En esas condiciones, si Estados Unidos tomaba a su

cargo el liderazgo de los consumidores, no ponía en evidencia su propio juego, que podría ser interpretado como muy desleal para sus aliados y, al mismo tiempo, empezaría a controlar el reciente poder que desplegarían en el futuro inmediato sus nuevos aliados, los grandes países petroleros. Para Estados Unidos era una manera de estar con un pie en cada bloque.

Una vez logrado el retroceso de Europa occidental y Japón en los mercados mundiales, Estados Unidos trató de evitar una carrera desenfrenada en los precios del petróleo, y buscó llegar a un acuerdo diplomáticamente controlable, en el que sin duda llevaría la mejor parte. Como se verá, esta situación también contribuye a explicar algunas facetas de la reciente reunión de la CCEI.

Giscard d'Estaing propuso, el 24 de octubre de 1976, una conferencia cumbre entre cuatro países productores y seis países consumidores. Su iniciativa trataba de institucionalizar la negociación entre productores y consumidores, para que ésta no desembocara en situaciones difíciles y, a la vez, para que las discusiones se desarrollaran en un ámbito más amplio, en el que los países europeos tuvieran —también— un lugar destacado.

Los países productores de petróleo aceptaron la propuesta, pero con la condición de que la conferencia no se cir-

1. Véase *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 88-96.

cunscubiera al tema energético, sino que vinculara este problema con el del desarrollo. La posición de los productores respondía a sus propios intereses en forma directa, en la medida en que muchos de ellos tenían inmediatamente planteado el problema de su propio desarrollo económico, y la Conferencia era una manera de discutirlo y de ganar posiciones frente a las naciones que detentan el monopolio tecnológico, presionando sobre los precios del crudo. La extensión de la convocatoria a las naciones menos desarrolladas también favorecía la posición de los países productores de crudo pero de una manera indirecta convirtiéndolos en líderes de la enorme mayoría de la humanidad. Sin entrar a discutir la verdadera influencia de los precios del petróleo sobre la crisis económica internacional que se desarrolló en los meses inmediatos posteriores al gran aumento de los precios, es indudable que el alza en los costos de la energía contribuyó a tornar más caóticos los mercados monetarios y profundizó la crisis económica. Frente a este hecho evidente, resultaba más fácil e irrefragable defender los nuevos precios y los posibles aumentos a partir del liderazgo del mundo subdesarrollado, o más exactamente, exigiendo en los foros internacionales respuestas a sus problemas de crecimiento económico y de escasa participación en el comercio internacional. A su vez, para los países subdesarrollados no productores de petróleo, la compañía de los petroleros en las negociaciones con el mundo altamente industrializado constituyó un aporte de fuerza, ya que está demostrado que los países industrializados sólo atienden las presiones originadas en los precios de las materias primas energéticas, de gran influencia en su propio desenvolvimiento económico, porque la gravitación de las otras materias primas es más fácil de eludir a partir de la organización de los mercados.

Estos conceptos definen las grandes líneas del diálogo Norte-Sur. Estados Unidos integra el bloque de los consumidores, pero tiene relaciones especiales con muchas naciones productoras, siendo ella misma, también, una gran productora de crudo. Por su parte, los países de Europa occidental son los más interesados en encontrar una solución a esta confrontación que los desgasta y los debilita financiera y comercialmente. En cuanto a los países subdesarrollados no productores, estrechan filas junto a los grandes productores de petróleo, a pesar

de que son los más perjudicados por el alza del precio del crudo.

En diciembre de 1975, en París, la CCEI dio mandato a cuatro comisiones para que efectuaran propuestas sobre la base de sendos temas que deberían desarrollar: energía, materias primas, desarrollo y problemas financieros. En febrero de 1976, en Manila, las naciones periféricas aprobaron un programa integrado para desarrollar en los foros internacionales que comprendía: 1) "indización" de los precios de las materias primas sobre la base de los precios de las manufacturas; 2) fondo común para financiar existencias de materias primas, a los efectos de regular la fluctuación de los precios; 3) anulación de la deuda pública externa a los países subdesarrollados, y 4) consolidación de la deuda comercial por un plazo de 25 años. Si estos puntos se consideraban imprescindibles para el desarrollo, era inevitable que aparecieran en las futuras conferencias energéticas, ya que se había resuelto ligar la negociación sobre el petróleo a la negociación sobre el desarrollo.

El diálogo de los desacuerdos

En el seno de las conferencias Norte-Sur se inició, de esa manera, un verdadero diálogo de sordos. Los países desarrollados las impulsaron con el exclusivo propósito de evitar nuevos aumentos en los precios del petróleo o, por lo menos, de controlarlos; los otros problemas no les interesaban y no entraban en sus programas inmediatos de acción, influidos por la crisis económica y monetaria. Para los países subdesarrollados, en cambio, el problema de la energía, si bien es grave en algunos casos, no constituye el objetivo principal de sus negociaciones. Ellos tratan, por el contrario, de ir mucho más lejos: su deseo es reformar el sistema económico internacional.

De alguna manera, los países desarrollados siempre desestimaron las peticiones de los países subdesarrollados, porque en el fondo sospecharon que esos pedidos atentarían contra los fundamentos del actual sistema económico. Su estrategia consistió en dar respuestas elusivas o proponer declaraciones que jamás se llevarían a la práctica, porque confiaban en que el frente Norte-Sur se desintegraría por la suma de los intereses encontrados dentro del bloque periférico, y por el peso agobiante que el aumento de los precios del crudo provocaba en las balanzas de pagos de los

países no productores de petróleo. Si bien es cierto que la solidaridad del mundo subdesarrollado es débil y que muchos países petroleros que ahora integran el "club" de los nuevos ricos han perdido su interés en bregar por las reivindicaciones del subdesarrollo, mientras que los importadores de crudo, acosados por sus balanzas negativas, prefieren que se llegue a un rápido acuerdo en materia de energía, el frente político del subdesarrollo siguió funcionando y, después de un largo paréntesis, la reapertura del diálogo en París permitió encontrar un bloque mucho más homogéneo de lo que cabría esperar.

Los países de Europa occidental fueron, quizá, los que advirtieron el fenómeno con más claridad. Ellos son los que más temen una disminución de las importaciones del Tercer Mundo y, aunque tienen menos que ofrecer, presionaron a Estados Unidos para que mostrara su voluntad de llegar a acuerdos sólidos en el marco de la Conferencia Norte-Sur. Fue así que, en la cumbre de Londres, celebrada a principios de mayo del presente año, las naciones desarrolladas prometieron hacer todo lo posible por revivir y asegurar el éxito del diálogo Norte-Sur.

Finalmente, la conferencia se inauguró en París, el miércoles 30 de mayo, en el Palacio de Conferencias de la Avenida Kléber. Asistieron los ministros de Relaciones Exteriores o de Economía de 19 países subdesarrollados y de 7 naciones altamente industrializadas, más la Comunidad Económica Europea (CEE). Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Camerún, Egipto, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, México, Nigeria, Paquistán, Perú, Venezuela, Yugoslavia, Zaire y Zambia integraban los 19, mientras que los 7 eran Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Japón, Suecia y Suiza. El objetivo formal de la conferencia era clausurar los trabajos que se habían venido realizando en el seno de las cuatro comisiones mencionadas. Fueron designados copresidentes de la conferencia los jefes de las delegaciones de Venezuela y Canadá.

Las propuestas para consideración de la conferencia, elaboradas en las cuatro comisiones, formulaban una serie de planteos de índole general, matizadas con algunas proposiciones. Era evidente que, de la omisión de ciertos temas y respuestas concretas, tenía que surgir, en

la conferencia, una discusión política encaminada a plantear una estrategia global para la economía internacional, capaz de regular las relaciones entre los países más desarrollados y los menos desarrollados.

La Comisión de Energía

La Comisión de Energía reconoció que lo que constituía el objeto de su discusión era un factor importante para la vida económica de los países industrializados y de los subdesarrollados y que el petróleo y el gas eran los recursos no renovables que con más rapidez podrían agotarse. Por eso es necesario llegar a un sistema energético no basado en el petróleo, sino en recursos mixtos. Para lograrlo, hay que pasar por una previa etapa de transición en la que se deben expandir, desarrollar y diversificar los recursos energéticos, poniendo en marcha una adecuada política de conservación del petróleo y del gas. En esta etapa, es necesario asegurar una oferta adecuada y estable de energía, esencial para el progreso económico. Asimismo, para impulsar el desarrollo energético, hay que procurar el acceso no discriminado a la tecnología.

La importación de petróleo reduce la capacidad de desarrollo de los países periféricos no productores de crudo. Estos países también deben tratar de desarrollar sus fuentes energéticas, pero ello requiere grandes volúmenes de capital, tecnología y *know-how*. Asimismo, los países periféricos también deben desarrollar su capacidad industrial y, en el caso de los productores de petróleo, hay que estimular el progreso en la refinación, la petroquímica y las industrias básicas con aprovisionamiento de hidrocarburos. Estos países, a su vez, deben contribuir a incrementar las existencias de petróleo del resto del mundo, cuando ello sea necesario. Todo esto exige desarrollar la cooperación económica internacional.

También es necesario proveer asistencia financiera a países subdesarrollados importadores de petróleo e intensificar los esfuerzos para la conservación de la energía, especialmente en los países desarrollados. La Comisión de Energía también examinó el problema de los precios y del poder de compra de la energía.

Teniendo en cuenta estos factores, la Comisión recomendó reducir la depen-

dencia del gas y del petróleo y aumentar el uso de otras fuentes energéticas, mediante medidas de aliento de diversa índole, tanto en el plano de la financiación y de los impuestos como de la transferencia de tecnología. En este aspecto, es muy importante la contribución que en técnica y capitales pueden hacer los países desarrollados. La Comisión rehusó formular recomendaciones sobre el problema de los ingresos acumulados por exportación de petróleo, pero, en cambio, recomendó a las instituciones de crédito internacional que evaluaran las posibilidades de inversión y desarrollo de nuevos recursos en los países subdesarrollados, especialmente los importadores de petróleo. Se consideró la necesidad de fomentar la cooperación internacional facilitando a los países subdesarrollados el acceso a la tecnología.

Esta propuesta común, que mantenía los temas más candentes en una prudente generalización, fue acompañada, en el seno de la Comisión, de otras dos propuestas. La primera de ellas, presentada por Egipto, Irán, Irak y Venezuela, representaba el interés de los países productores. La segunda, presentada por Japón, reflejaba el interés de los países importadores.

Los productores empezaron por aseverar que el precio del petróleo ha sido afectado en su poder de compra. En consecuencia, hay que tratar de estabilizar los precios, pero tomando en cuenta las variaciones de los costos y la erosión debida a la inflación y a la depreciación de las monedas, es decir, "indizando" los valores. La propuesta japonesa, por su parte, se preocupaba por reducir la incertidumbre con relación a los precios de la energía. Se reconoce el problema del poder de compra de los precios del petróleo, pero también se pone el acento en la importancia de reducir la inflación. La propuesta destacaba la posibilidad de llegar a acuerdos institucionales sobre los precios de la energía y de las materias primas.

Otro grupo de países subdesarrollados pero importadores netos de petróleo (Brasil, Camerún, Jamaica, India y Zaire) propusieron el aumento de las facilidades de crédito especiales del Fondo Monetario Internacional para los países subdesarrollados no productores, en los que debe promoverse la exploración y el desarrollo energéticos sobre bases nacionales, con la colaboración tecnológica de

las compañías privadas y de los países desarrollados.

El trabajo en las otras comisiones

La Comisión de Materias Primas, dividida en dos grupos de trabajo, efectuó una evaluación pesimista, en la que se constataba que no había existido ningún progreso en el comercio entre los países desarrollados y los subdesarrollados importadores de petróleo y preconizaba la formación de un fondo común para las materias primas. El informe tuvo dos observaciones diferentes; una proveniente del grupo de los 19 países subdesarrollados (G-19), que destacaron la falta del progreso, y otro del grupo de los 8 (G-8; los 7 países altamente industrializados, más la CEE) de tono más optimista, aunque reconocía que si bien cierto número de temas aún están pendientes de acuerdo, en otros se ha realizado un progreso considerable.

La Comisión de Desarrollo elaboró informes sobre Alimentos y Agricultura, Infraestructura e Industrialización y Transferencia de Tecnología. La Comisión consideró que la tasa mínima de crecimiento para la producción de alimentos, de 4% por año, acordada en la Conferencia Mundial de Alimentos, sólo podrá lograrse mediante esfuerzos concertados entre los países subdesarrollados y las naciones industrializadas. Sin embargo, los primeros deben fomentar la expansión de la agricultura con medidas que aseguren el cambio progresivo en la estructura socioeconómica y en las áreas rurales y también a través de la intensificación de la asistencia oficial al desarrollo agropecuario. Deben, asimismo, favorecer los proyectos que beneficien a los productores, con similar hincapié en sus aspectos económicos y sociales así como desarrollar la producción de fertilizantes y semillas. La Comisión juzga necesario un acuerdo internacional de granos con disposiciones sobre reservas.

El informe sobre infraestructura considera que es necesario promover la asistencia internacional, multilateral o bilateral, para mejorar la eficiencia de los transportes y promover las estructuras regionales.

El informe sobre industrialización parte de la premisa de que se debe cumplir con los términos de la Declaración de Lima (Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial —ONUDI—, en

1975) para acelerar la industrialización de los países subdesarrollados, los que deberán acrecentar su participación en la producción industrial mundial hasta llegar a 25% del total para el año 2000. La Comisión estableció que se debe contribuir a acrecentar la capacidad industrial de los países subdesarrollados, convertir a la ONU en una agencia especializada y establecer un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial. Este informe sobre industrialización presenta dos proyectos: uno, proveniente del G-19, destaca la necesidad de que los países desarrollados liquiden sus barreras aduaneras para la industria no competitiva. Por su parte, los países del G-8 se comprometen a tomar "medidas apropiadas" en el campo de la política comercial, sin especificarlas.

En lo que respecta a la transferencia de tecnología se produjeron, también, dos versiones. Los países subdesarrollados pidieron la revisión de la Convención de París para que, en la modificación, se tuvieran en cuenta sus intereses. Asimismo, plantearon la necesidad de adoptar un código de conducta sobre transferencia de tecnología que establezca reglas equitativas, facilitando los flujos tecnológicos hacia los países subdesarrollados bajo términos y condiciones que les resulten favorables. La propuesta indica que la transferencia anual de recursos de los países industrializados debe alcanzar 0.05% de su producto bruto y 10% de sus gastos de investigación, para emplear en programas de interés de los países subdesarrollados. También se pide el establecimiento de bancos de información. En su versión, los países desarrollados examinan estos temas de una manera más general, sin fijar porcentajes o cuotas y sin responsabilidades específicas. En el capítulo de exportación de tecnología, los países subdesarrollados solicitan que las naciones altamente industrializadas importen tecnología del mundo subdesarrollado, acordándole un tratamiento preferencial.

Con relación a las inversiones y a la acción de las corporaciones internacionales, los países subdesarrollados reconocen que aquéllas han contribuido al crecimiento económico y a promover la transferencia de tecnología, el incremento del empleo y del ingreso y el fortalecimiento de las balanzas de pagos, pero el informe dice que los países desarrollados deben alentar a sus inversores en la explotación de los recursos de los países

subdesarrollados, y no impondrán restricciones a esas inversiones. Se afirma que las empresas extranjeras deben sujetarse a las leyes de los países subdesarrollados. También expresa que es urgente elaborar un código de conducta para las empresas transnacionales (ET), que incluya el inalienable derecho de cada Estado nacional de ejercer su soberanía. El código deberá tener carácter compulsivo, se aplicarán las resoluciones de la ONU contra las prácticas corruptas de las ET y se adoptarán reglas de control sobre las prácticas restrictivas de esas mismas empresas.

El informe del G-8 enumera medidas necesarias para desarrollar la cooperación económica internacional, solicita que se definan claramente las reglas del juego y las garantías, así como las políticas destinadas a asegurar una eficiente utilización de la mano de obra y la movilización de los recursos financieros internos.

La cuarta comisión se ocupó de inversiones directas; acceso a mercados de capitales y otras corrientes financieras; cooperación entre países subdesarrollados; inflación y balanza de pagos.

En su informe, la Comisión reconoce las ventajas de la inversión privada y su relación con las condiciones bajo las cuales esas inversiones son admitidas y tratadas. Se reconoce el derecho de los países que reciben inversiones a definir tales condiciones, pero se cree conveniente la existencia de un clima apropiado de inversiones, que se definan claramente las reglas del juego, que no exista discriminación, salvo para los sectores específicamente vedados a la inversión extranjera, que se facilite la transferencia de las ganancias y del capital cuando se termine la inversión y que, si hay expropiación, exista también una compensación adecuada. El G-8 planteó que se reconozcan los derechos e intereses de los inversores extranjeros ya establecidos en caso de cambios políticos, legales o administrativos; que, si hay privación de la propiedad, haya una adecuada y efectiva compensación, y que la privación sea exclusivamente por propósito público.

En el informe también se solicita que se incrementen los esfuerzos para asegurar el acceso de los países subdesarrollados al mercado de capitales, con liberalización de regulaciones y medidas, que exista una nueva emisión de derechos

especiales de giro (DEG) y que se amplíe el crédito de exportación de los países desarrollados a los menos desarrollados. La única enmienda realizada en esta parte por los países industrializados se refiere a los DEG. Mientras el G-19 solicita una masa de 5 000 a 8 000 millones de DEG por año, el G-8 no propone cantidad alguna.

Finalmente, esta misma Comisión rindió un informe sobre la cooperación entre los países subdesarrollados.

La conferencia de cuatro días

La Conferencia empezó por el estudio de los informes de las cuatro comisiones. En la primera sesión, los países subdesarrollados propusieron unir los grupos correspondientes a energía y cuestiones financieras, lo que fue aceptado. En las primeras jornadas hubo motivos para suponer que la Conferencia podía llegar a algún resultado, pero a medida que llegaba la hora de clausura se hicieron evidentes las divergencias que separaban a los dos bloques. Estas diferencias no eran otras que las que se plantearon desde el inicio del diálogo Norte-Sur.

Como se recordará, los países industrializados concurren a estas reuniones casi con la exclusiva preocupación de llegar a un acuerdo sobre el precio de la energía, tratando de crear un foro internacional en el que se negociara ese problema. De esa manera, la evolución del costo de la energía no sería un imprevisto, sino una materia sujeta a negociación. Tan pronto como se abrió la conferencia, quedó claro que esa restringida posición no había variado. El propio secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, dijo en la sesión de apertura que era necesario promover una institución "que pueda contribuir a la creación de un orden energético mundial".² El secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, fue aún más directo: "la prosperidad de la economía mundial depende de la estabilidad de los precios, en el dominio de la energía, y de la regularidad en los aprovisionamientos".³

Para los países subdesarrollados, agobiados por el crecimiento económico insuficiente, la falta de recursos para encarar la industrialización e incluso las importaciones de alimentos, con la ma-

2. Véase *Le Monde*, París, 31 de mayo de 1977.

3. *Idem*.

yoría de su población sujeta a condiciones extremas de pobreza y víctimas de la desocupación, con materias primas depreciadas en los mercados mundiales y con una creciente marginación relativa en el intercambio internacional y en el movimiento de capitales, el problema de la energía que padecen los ricos no resulta demasiado conmovedor. Muchos de esos países sufren también los altos costos de la energía, pero en París se impuso, en términos generales, el criterio de estrechar filas en torno al único tema de la agenda de discusiones capaz de presionar al mundo desarrollado: el petróleo y la energía.

Los países periféricos aceptaron en principio el diálogo de París, siempre que la cuestión del petróleo se vinculara con los problemas del crecimiento económico, la financiación y las materias primas. Durante el transcurso de las discusiones, los países ricos efectuaron algunas concesiones sobre financiamiento y accedieron a constituir un fondo para sostener los precios de las materias primas, pero dieron respuestas vagas y generales a las principales reivindicaciones de los pobres. A través de esas respuestas no se advierte una verdadera voluntad de modificar en alguna medida el actual ordenamiento económico internacional. En respuesta, los países subdesarrollados se negaron a integrar el organismo consultivo sobre la energía y la reunión se precipitó en el fracaso. El representante de Irak expresó con bastante claridad el sentimiento del grupo de los 19: "los países en desarrollo no tienen ningún motivo para garantizar el aprovisionamiento de petróleo si los países desarrollados no hacen alguna concesión en materia de transferencia de tecnología o de apertura de sus propios mercados".⁴

Un magro resultado

La Conferencia finalizó la noche del 2 de junio, después de una larga ronda de negociaciones, muchas de ellas infructuosas. Se acordó integrar un fondo común para la regularización de las materias primas. Sus objetivos quedarán precisados en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ámbito en el que también se discutirán otros elementos constitutivos del fondo. Es posible que el problema sea debatido en noviembre próximo.

4. Véase *Le Monde*, París, 4 de junio de 1977.

Los países desarrollados también accedieron a establecer una ayuda especial de 1 000 millones de dólares para las naciones más pobres. El fondo se integrará con un aporte de 385 millones de dólares por parte de la CEE, que se administrará a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional y beneficiará a las naciones más afectadas por la evolución de sus balanzas de pagos. Estados Unidos contribuirá con 375 millones de dólares, que se repartirán mediante ayuda bilateral; Japón aportará 114 millones por la misma vía; Canadá invertirá 51 millones en préstamos públicos y ayuda multilateral y bilateral; Suecia aportará 29 millones para anular el servicio de la deuda de los países más afectados. Otras contribuciones de menor cuantía corresponderán a Suiza, Australia y España.

Además, habrá una ayuda pública al desarrollo equivalente a 0.7% del PNB. La ayuda será aumentada anualmente y los fondos así recaudados se integrarán a la planificación de cada uno de los países beneficiarios. El programa de ayuda se planificará a largo plazo, de tal manera que no perturbe el funcionamiento de la balanza de pagos.

El desacuerdo afectó a la comisión clave, encargada de discutir el problema de la energía y del financiamiento externo. Esta comisión estuvo copresidida por Estados Unidos y Arabia Saudita, en representación del G-8 y el G-19, respectivamente.

Al término de la conferencia, la prensa mundial tradujo, directa o indirectamente, la sensación de fracaso. No obstante, en los países desarrollados se dio a entender que no todo estaba perdido; en cambio, el balance efectuado en las naciones periféricas ha sido generalmente menos optimista.

La incomprensión de los desarrollados

Es curioso comprobar la estrechez de miras de los grandes medios informativos mundiales. *The New York Times* brinda un ejemplo de esta óptica: "En primer lugar, [la Conferencia] demostró una vez más que los países en desarrollo consideran a los exportadores de petróleo como sus aliados, más que como sus enemigos, aun cuando sufran más que los ricos el costo en alza de la energía. Segundo, el cártel de los exportadores de petróleo —la organización que más éxito ha teni-

do en la manipulación de un mercado— emergió incólume de la Conferencia Norte-Sur, y su victoria estimulará la organización de otros mercados de materias primas".⁵

"Durante dos días y dos noches se fueron acercando los puntos de vista sobre varios problemas y los países industrializados efectuaron un cierto número de concesiones (sobre las cuales les será difícil volver atrás, aunque el resultado de la conferencia haya sido un 'fardo'), pero la Conferencia se atascó en el mismo asunto que hizo tan difícil comenzar el diálogo, hace más de dos años: la posición que se daría a las consultas sobre energía".⁶ "Las naciones ricas también ofrecieron 1 000 millones de dólares en ayuda especial a los países en desarrollo más pobres. Esto pudo no haber sido un récord en generosidad (pareció una forma de tranquilizar sus conciencias), pero se esperaba que abriera el camino para una mayor flexibilidad de la OPEP".⁷

En todos los comentarios se puede notar la aparente extrañeza de que los países subdesarrollados prefieran todavía la compañía de sus pares exportadores de petróleo, antes que la de las naciones altamente industrializadas; el temor de que el ejemplo de la OPEP se extienda a otras organizaciones de materias primas; la falta de respuestas a la aparente generosidad del mundo desarrollado y la inflexibilidad de los subdesarrollados, pero no se expuso en ningún momento, en toda su crudeza, la magnitud del abismo económico que separa a las naciones ricas de los países pobres, el cierre desesperanzado de las perspectivas del futuro, la crisis y la miseria de las masas del Tercer Mundo. "En nuestros países, la decepción de la opinión pública será grande" dijo el representante de Canadá al terminar la Conferencia,⁸ pero, ¿cuál es el sentimiento que quedará en el Tercer Mundo después del naufragio de esta posibilidad de apertura hacia un orden mundial más justo?

Si algunos observadores se ilusionaron

5. Paul Lewis, "Commodities: A 'Rigged' Market Seldom Works", en *The New York Times*, Nueva York, 5 de junio de 1977.

6. Véase *Europe*, Bruselas, 3 de junio de 1977.

7. Véase *The Economist*, Londres, 4 de junio de 1977.

8. Véase *Le Monde*, París, 4 de junio de 1977.

en algún momento esperando que la nueva política de Estados Unidos representara la posibilidad de una especie de Plan Marshall para el mundo subdesarrollado, como paso inicial hacia un orden económico más equitativo, en París han debido comprobar que no habrá nada de eso. El sistema capitalista mundial está en crisis y cada uno trata de salvar lo que puede, aun los que se supone que no tienen demasiado que perder. Tal es el caso de Estados Unidos. Después de haber usado el aumento de los precios del petróleo para desplazar a la competencia europea y japonesa, ha tratado de mediatizar a la OPEP a través de la creación de un órgano mundial de consulta sobre la energía, para evitar cualquier riesgo de independencia de aquella organización. El intento no le salió mal del todo, porque si bien la propuesta fracasó, es evidente que —aun más allá de los límites de los bloques establecidos en la Conferencia Norte-Sur— ha conseguido que Arabia Saudita, y en menor medida Irán, se acerquen a sus posiciones y que el bloque del Tercer Mundo haya mostrado sus grietas, aunque formalmente haya votado en forma uniforme en el seno de la Conferencia.

La actual crisis del dólar, que estalló menos de dos meses después de la finalización del diálogo Norte-Sur, es un ejemplo del clima que existe en la comunidad económica internacional. El déficit en cuenta corriente previsto por Estados Unidos para 1977 es de alrededor de 11 000 millones de dólares. Pero el déficit tiene un significado muy diferente para Estados Unidos que para el resto del mundo, porque su moneda nacional se usa como medio internacional de pago. Estados Unidos se abre paso en los mercados mundiales con la devaluación del dólar, aunque para ello debe lanzar una emisión permanente de moneda que crea una inestabilidad imposible de vencer en los mercados monetarios. Esa enorme liquidez presiona los precios hacia arriba, fomenta la inflación, eleva los costos y deteriora la inversión en casi todo el mundo capitalista. En Estados Unidos, ese fenómeno conduce también a una mayor desocupación, pero la maquinaria económica estadounidense no se detendrá por eso, sino que recuperará alguna parte del terreno que abandonen sus competidores y aliados. El secreto de ese poder reside en que la emisión de dólares es una emisión en su propia moneda nacional, que corre en un circuito al cual se van integrando las propias

fuentes que alientan el déficit de la balanza de pagos, entre ellas, en primer lugar, los principales países árabes, empezando por Arabia Saudita.⁹

La nueva baja del dólar augura mayor desocupación y crisis en Europa occidental. Después, podría volver a repetirse la rueda de 1973. La menor demanda de esos países deprimirá la exportación de las naciones pobres y los precios de sus productos en el mercado mundial, con lo que los que menos tienen que ofrecer serán los que harán la mayor contribución a la crisis. El fracaso de París es una consecuencia del proceso económico desatado en el mundo capitalista y una muestra de lo que será el futuro inmediato si los grandes poderes económicos del mundo —y, en primer lugar, Estados Unidos— no se avienen a una política de mayor colaboración, que prepare el camino hacia una estructura de ingresos más equitativa. De lo contrario, amenaza el caos. Pero si el caos llega, no será precisamente por la incompreensión o la inflexibilidad de los más débiles. □

ESPAÑA

. . .se redescubre demócrata

El 15 de junio de 1977 el pueblo español puso de manifiesto, con su voto, el aplastante, el abrumador fracaso de una tiranía que durante 38 años utilizó todos los medios de represión y convencimiento que el poder absoluto le daba, para tratar de aherrojarlo mental y físicamente. La ultraderecha franquista fue barrida del escenario político y quedaron frente a frente dos grandes fuerzas expresamente comprometidas con la democracia: la centrista, que agrupa a doce partidos que van de la derecha moderada a los socialdemócratas, representada por la Unión de Centro Democrático (UCD), y la socialista, que congrega corrientes marxistas y no marxistas dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Vale la pena subrayar el derrumbe total del franquismo, que desapareció miserablemente cuando se mellaron las armas del terror, pues constituye una lección ejemplar para émulos que en otras tierras se hacen la ilusión de poder escapar a ese destino. Un hecho, entre

muchos, bastará para ilustrar el punto: cuando el 1 de abril se abolió oficialmente el Movimiento Nacional, desde 1939 única organización política permitida en España, depositaria de la "ideología y valores" del franquismo y encargada de educar en ellos a todos los españoles, con el apoyo del omnímodo aparato estatal, el suceso pasó casi desapercibido. La propia ultraderecha se quedó virtualmente impasible, preocupada como estaba por la inminente legalización del Partido Comunista Español (PCE), que se produjo días después. Naturalmente, esto no quiere decir que los intereses que defendía el franquismo hayan desaparecido o que al menos se haya renovado sustancialmente órganos del Estado tan importantes como el ejército, la Guardia Civil y la policía, que sustentaron al régimen del fallecido tirano. Pero eso es otra historia. Parafraseando a Francisco Franco, quien afirmó dejar su sistema "atado y bien atado", diecinueve meses después puede asegurarse que el franquismo está "muerto y bien muerto".¹

Un segundo hecho de gran trascendencia que han revelado las elecciones legislativas es que casi la mitad de los españoles son de izquierda. En efecto, sumados los votos obtenidos por el PSOE, el PCE, el Partido Socialista Popular (PSP) y otras formaciones menores, el total rebasa ampliamente 44% de los sufragios emitidos. Este es un resultado extraordinario si se tiene en cuenta que fue logrado en un país en el que todas las actividades de la izquierda estaban proscritas desde hacía casi 40 años y en el que las primeras elecciones libres se desarrollaron bajo los restos de una superestructura franquista que cohibió a extensos sectores del electorado, particularmente en las regiones rurales.

La elección de senadores (por las modalidades con que se efectuó y la designación de 41 de ellos por el rey Juan Carlos) no refleja la composición política del país con tanta aproximación como la de diputados (aunque en ésta el sistema de representación proporcional escogido también estaba destinado a favorecer a la coalición centrista), por lo que aquí reproduciremos únicamente los resultados correspondientes a la mencionada en último término. Los 350 esca-

9. Paul Fabra, "Irresponsabilité", en *Le Monde*, París, 3 de junio de 1977.

1. Véase "España: la lucha por las libertades", en *Comercio Exterior*, vol. 26, núm. 6, México, junio de 1976, pp. 678-687.

ños del Congreso se distribuyeron de la manera siguiente: UCD, 166; PSOE, 118; PCE, 19; Alianza Popular (AP), 16; Pacto Democrático de Cataluña (PDC), 11; Partido Nacionalista Vasco (PNV), 8; PSP, 6; Unión de Centro Catalán (UCC), 2; extrema izquierda, 2; independientes, 2.

El triunfo de la UCD era esperado y lo único sorprendente fue la derrota que sufrió en la mayoría de las grandes ciudades españolas, incluidas Barcelona, Valencia y Sevilla. La popularidad de su dirigente más visible, el primer ministro Adolfo Suárez, es indudable; ello como consecuencia de la habilidad con que ha sorteado toda clase de dificultades para poner en ejecución la política del rey Juan Carlos, destinada a eliminar el sistema franquista mediante la introducción gradual de reformas democráticas. Otro factor no despreciable que favoreció a la coalición centrista y contribuyó a que obtuviera 33.9% de la votación fue, en opinión de especialistas, el aún generalizado temor de votar contra el Gobierno, sobre todo en las pequeñas poblaciones de provincia. En esta perspectiva, la victoria de la UCD resulta bastante relativa y deja aparecer serias debilidades —no sólo la composición heterogénea de la agrupación, sino también el carácter declinante de una parte importante de su actual base electoral— que podrían influir considerablemente en los resultados de elecciones venideras.

Al mismo tiempo, y sin que haya contradicción con lo anterior, la agrupación centrista cuenta con fuertes posibilidades para llegar a consolidarse como partido mayoritario. La más importante se funda, al menos a corto plazo, en el papel indispensable que desempeña en la estabilización política del país, al actuar como amortiguador de los antagonismos de izquierda y derecha que de otro modo podrían manifestarse con violencia. Esta función estabilizadora, con las ventajas que implica ante un electorado temeroso de otra guerra civil, ofrece a la UCD la mejor oportunidad para atraerse una clientela numerosa y creciente en las grandes ciudades.

Impresionante sin duda alguna fue el éxito logrado por el PSOE, que habiendo surgido hacía pocos meses de la clandestinidad y carente, por tanto, de la organización y los recursos que se consideran indispensables para un gran partido de masas, consiguió en una breve campaña electoral de tres semanas 28.7%

de la votación total. La explicación de este fenómeno, sin disminuir para nada el mérito de sus actuales dirigentes, entre los que destaca Felipe González, se halla en el prestigio histórico de las ideas socialistas entre los trabajadores españoles. Esas ideas fueron sembradas en años de dura y peligrosa labor por grandes líderes —Pablo Iglesias, Antonio García Quejido, Daniel Anguiano, Andrés Saborit, Ramón Lamóneda, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y muchos otros que sería prolijo nombrar— y 40 años de opresión no pudieron borrarlas. Esta es la razón fundamental de que la actual dirección del PSOE haya obtenido, a pesar de las circunstancias desfavorables anteriormente mencionadas, tan espléndida cosecha. El PSOE será el factor decisivo de la izquierda en los debates de las Cortes para elaborar la nueva Constitución, y todo indica que constituye una opción real a mediano plazo para el gobierno del país.

Los factores adversos ya descritos, que deformaron los resultados de estas primeras elecciones libres, pesaron en forma particularmente abrumadora en el caso del PCE. Los esfuerzos de su líder Santiago Carrillo, por ofrecer la imagen tranquilizadora de un comunismo democrático, independiente y crítico del modelo soviético, no lograron desarraigar otra imagen, la del partido semiclandestino, legalizado a duras penas y con amenazadora oposición, por lo que persistió la barrera psicológica levantada por la desconfianza y el temor. Aun así, el PCE se ha convertido en la tercera fuerza política del país, aunque muy a la zaga de la UCD y del PSOE. En la perspectiva, esa barrera psicológica se irá debilitando lentamente y la excelente organización de los comunistas les permitirá ir mejorando gradualmente sus posiciones en las Cortes.

La otra gran sorpresa de las elecciones fue el resonante fracaso de la Alianza Popular (AP). Antes de los comicios, el presidente de Gobierno Adolfo Suárez había dejado transparentar su inquietud ante la posibilidad de que ese partido pudiera arrebatarse un amplio sector de derecha y constituirse en fuerte obstáculo para sus planes de gobierno. Los hechos demostraron que, por el contrario, gran parte de la derecha estaba muy consciente de que los tiempos no estaban para nostalgias franquistas y de que la agrupación centrista era la garantía

más segura frente a la temida marea izquierdista. Es significativo que el ataque más acerbo a Suárez, durante la campaña electoral, proviniera de Manuel Fraga Iribarne, líder de la AP, quien lo acusó de traidor al franquismo y de dividir a su clientela electoral. La formación derechista sufrió las consecuencias de su notorio neofranquismo, aunque no en forma tan aplastante como la organización fascista de Blas Piñar que, completamente desprestigiada, fue borrada del mapa electoral. En el caso de la AP, sin embargo, aún no se ha dicho la última palabra, ya que si olvida sus ligas más comprometedoras con el franquismo y se adapta mejor a los intereses presentes de sus electores naturales, todavía puede recuperar a muchos tráfugas de derecha que en esta ocasión dieron prioridad al "voto útil" y apoyaron al centro.

La última fuerza de importancia en el panorama político español está constituida por los partidos regionalistas. En su caso, el poderío demostrado en múltiples acciones durante pasados años prefiguraba el éxito electoral de sus posiciones autonomistas, al menos en Cataluña y las Provincias Vascongadas. La firmeza con que vascos y catalanes han mantenido a través del tiempo sus aspiraciones de autonomía, ha terminado por convencer al Gobierno de la necesidad de tomar dichas aspiraciones en consideración. Empero, las negociaciones sobre el tipo y alcance de la autonomía se anuncian como una de las cuestiones explosivas a que se enfrentará el presidente de Gobierno Suárez, ratificado en su cargo por el rey Juan Carlos después de las elecciones.

En sectores importantes del ejército está muy arraigada la sospecha de que los movimientos de autonomía pueden llegar a disgregar al país. Este problema, o una temprana victoria electoral de los socialistas, sin hablar ya de los comunistas, podría ser el pretexto para un golpe militar. Es indudable que este peligro subsistirá mientras no se haya producido una evolución más marcada en los cuerpos armados, incluida una renovación sustancial de los mandos.

Otro grave problema que acaparó la atención del nuevo gobierno de Adolfo Suárez, formado a principios de julio, es la crisis económica que aqueja al país.

Desde 1975 el crecimiento de la eco-

nomía se halla prácticamente estancado; la inflación, cada vez más inmanejable, se aceleró bruscamente en 1977; el desempleo cunde y alcanza ya niveles amenazadores; el desequilibrio de la balanza de pagos ha venido empeorándose como consecuencia del enorme déficit comercial y de la reducción de importantes ingresos invisibles; la deuda externa asume proporciones alarmantes para una nación cuyo desarrollo ha venido dependiendo en gran medida de las inversiones y créditos extranjeros.

El aumento del producto nacional bruto en 1975 fue de sólo 0.8%; en 1976 se estimó en 2%, y para el presente año las previsiones más optimistas lo sitúan en 2.3%. El hecho indiscutible es que se ha registrado una disminución notable en la tasa de inversión global y que esta evolución, agravada por la fuga de capitales en los meses que precedieron a las elecciones, influirá considerablemente en el comportamiento de la actividad económica futura del país. Diversos especialistas vaticinan, por ejemplo, que durante los próximos tres años España no podrá alcanzar tasas de crecimiento superiores a 2 o 3 por ciento.

En lo que concierne a la inflación su tasa anual de progresión pasó de 14.1% en 1975 a 20% aproximadamente en 1976 y se estima que llegará a 30% en 1977. En estos últimos meses los precios se han disparado y se teme que aun ese nivel será rebasado. En junio, un informe del Banco de Bilbao subrayó que mientras no se corrigiera esta situación resultaba imposible encarar con éxito los demás problemas económicos. Para entonces, por lo demás, se había generalizado la opinión de que la peseta estaba sobrevaluada.

Otro aspecto por demás sombrío es el creciente desempleo. En septiembre de 1976 se estimó que alrededor de 5.5% de la fuerza de trabajo estaba desocupada, pero la situación ha empeorado al decrecer la actividad económica y disminuir la emigración a otros países europeos que también padecen serias dificultades. En la actualidad se calcula que alrededor de un millón de personas (8%) están sin trabajo.

A todo esto se añade el deterioro progresivo de la situación externa de la economía. El déficit de la balanza de pagos fue de 4 200 millones de dólares en 1976 y no bajará de 3 800 millones en 1977. A pesar de los esfuerzos por

fomentar las exportaciones —particularmente hacia América Latina— la enorme brecha en el comercio exterior sólo ha podido compensarse parcialmente con créditos, por lo que la deuda exterior se aproxima a 12 000 millones de dólares y para fines de año llegará a 14 000 millones. Una consecuencia de lo anterior es que las reservas de divisas han declinado en 2 200 millones de dólares en los últimos tres años y en la actualidad su total no pasa de 4 500 millones de dólares.

En estas circunstancias, casi el primer acto de gobierno de Adolfo Suárez fue anunciar, el 11 de julio, una serie de medidas de carácter económico, entre ellas la devaluación de la peseta en 25%, con lo que la nueva paridad se estableció en 87.30 pesetas por un dólar. Otras disposiciones importantes atañen a la reforma fiscal, la lucha contra la evasión de impuestos —problema generalizado en España—, los estímulos a la creación de empleos y, desde luego, al control en los aumentos de salarios, que constituye el punto central del programa.

La reacción preliminar de los partidos de izquierda ante estas medidas, aunque de crítica, fue notablemente moderada. La principal impugnación vino de los sindicatos, que protestaron por el hecho de que el programa no incluyera, como contrapartida de la limitación en las alzas de salarios, el control de los precios.

Esta era la situación de España al iniciarse el mes de julio, tras una serie de acontecimientos que desembocaron en las primeras elecciones libres en 40 años y en el triunfo de los partidos demócratas. En forma muy resumida pasemos revista ahora a los principales acontecimientos de los últimos doce meses.

La primera fecha importante es la del 1 de julio de 1976, cuando el rey Juan Carlos, ya consolidado en el poder, tomó la decisión de apresurar la evolución del país hacia la democracia y destituyó al primer ministro Carlos Arias Navarro, representante de una tendencia muy ligada al régimen franquista y cuya gestión gubernamental se había caracterizado por la resistencia a romper con el pasado.

Con la llegada de Adolfo Suárez al poder se inicia decididamente una políti-

ca destinada a eliminar el franquismo y asegurar, en virtud de este mismo proceso, la popularidad de la Corona.

Esta política va a tropezar constantemente con la oposición de los grupos y personalidades de la derecha franquista, con el terrorismo de esa misma tendencia —que en una primera fase cuenta con el apoyo subrepticio de cuerpos policíacos— y, en algunos casos, con la resistencia de altos oficiales militares. El mérito de Adolfo Suárez, con el apoyo del Rey, consiste en no haberse dejado desviar de su propósito y su recompensa puede medirse por el hecho de que pasó de figura casi desconocida —que suscitaba sospechas por sus ligas con el Movimiento Nacional y el Opus Dei— a ser uno de los personajes políticos más populares de España.

Cronológicamente, los pasos más importantes hacia la democratización del país dados por el Gobierno fueron los siguientes:

- El 14 de julio de 1976 se aprobaron los cambios en el código penal que permitían la entrada en vigor de la ley que autorizaba la existencia de partidos políticos,² con excepción de aquellos sujetos “a una disciplina internacional” y que buscaran “establecer un sistema totalitario”. La redacción estaba destinada a dejar marginados a los comunistas.

- El 4 de agosto se decretó una amnistía para los prisioneros y exiliados políticos. La medida tenía un carácter parcial, ya que en ambos casos se establecían excepciones, la más importante de las cuales era que no se aplicaba a los actos terroristas que hubieran implicado muertes o puesto en peligro la vida de personas. En el caso de los exiliados, subsistía la prohibición de entrar en España para ciertas personalidades de la Guerra Civil. Esto no obstante, en las semanas subsiguientes recuperaron la libertad centenares de izquierdistas convictos de delitos de opinión y varios condenados por rebelión militar y sedición.

- El 10 de septiembre el Gobierno anunció una ley de reforma política que estipulaba la celebración de elecciones en junio de 1977, para un parlamento de dos cámaras que tendría facultades

2. Véase el artículo citado de *Comercio Exterior*.

para elaborar una nueva Constitución. Esta ley crucial, destinada a abolir de hecho una parte importante del aparato franquista, incluidos el Movimiento Nacional y las Cortes de entonces, fue aprobada por esas mismas Cortes el 18 de noviembre. En esa oportunidad, tanto el Gobierno como la legislatura se pusieron de acuerdo para introducir modalidades de elección destinadas a favorecer en la práctica a la derecha y al centro. Aun así, la ley sometida a referéndum el 15 de diciembre, fue ratificada por 94.2% de los votantes, es decir, la abrumadora mayoría de la población.

- El 30 de diciembre se puso fin a la existencia del Tribunal de Orden Público, o tribunal político, y se decidió que en lo sucesivo los terroristas no serían juzgados por cortes marciales, salvo en caso de ataques a las fuerzas armadas.

- El 9 de marzo de 1977 se autorizaron las huelgas, siempre que no se emprendieran por razones "políticas". Simultáneamente, se acrecentaron las facultades de los empresarios para despedir a trabajadores por razones económicas o disciplinarias.

- El 17 de marzo un nuevo decreto de amnistía amplió las disposiciones del anterior. En particular, numerosos separatistas vascos fueron puestos en libertad, algunos con la condición de que partieran al extranjero.

- El 30 de marzo se aprobó una ley que dejaba en libertad a los trabajadores para formar sindicatos independientes, y a los empresarios para organizarse con el fin de defender sus intereses.

- El 1 de abril se abolió el Movimiento Nacional, única organización política permitida bajo el régimen franquista y, por tanto, entidad a la que obligatoriamente debían pertenecer todos los que quisieran hacer carrera en la política o la administración del Estado español.

- El 9 de abril el Gobierno legalizó el Partido Comunista Español. Esta fue una de las medidas que más resistencia provocaron, especialmente en determinados sectores militares, que hicieron circular un documento en el que se afirmaba que todas las unidades del ejército condenaban la legalización. El documento se consideró por la prensa como una advertencia brutal al presidente Adolfo

Suárez, y por implicación, al rey Juan Carlos. El 12 de abril renunció el almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, y el 20 del mismo mes fue destituido el general Manuel Álvarez Zalba, jefe de la Secretaría del Ministerio del Ejército.

- El 15 de abril se anunció oficialmente que las elecciones legislativas se celebrarían el 15 de junio.

Además de estas leyes y decretos, que de hecho o derecho desmantelaban al régimen franquista, el Gobierno adoptó otras medidas de diversa índole, destinadas a mejorar en la práctica el clima político de la nación.

Así, el 17 de julio de 1976 anunció su intención de iniciar conversaciones con la oposición. El 22 de septiembre nombró viceprimer ministro al general Manuel Gutiérrez Mellado, considerado como un militar liberal, y el 15 de enero de 1977 designó jefe del Estado Mayor del Ejército al general José Vega Rodríguez, reputado asimismo como uno de los oficiales superiores más liberales del país. Previamente, en diciembre, habían sido sustituidos los comandantes de la Guardia Civil y de los cuerpos de policía, a raíz de diversos sucesos que indicaban la complicidad de estos últimos en algunas actividades de provocación así como de apoyo a las organizaciones terroristas de derecha. Finalmente, el 19 de enero el Gobierno hizo concesiones a los nacionalistas vascos, al autorizarles la exhibición de su bandera y el uso de su idioma, junto con el castellano.

A lo largo del período que se pasa en revista, la oposición de izquierda mantuvo una actividad constante para presionar al Gobierno en favor de medidas democráticas que tuvieran en cuenta el parecer de sus organizaciones. Esta presión fue de tipo multiforme: desde la ejercida directamente por los representantes de los partidos en sus conversaciones con el presidente Suárez, hasta las manifestaciones y huelgas en demanda de amnistía para los prisioneros políticos, de autonomías regionales, y de protesta por la política laboral y económica.

En esta lucha desempeñaron un papel muy importante órganos periodísticos de izquierda e independientes, que sin arredrarse por las amenazas denunciaron persistentemente los hechos de violencia y

represión. En el caso de las demandas de amnistía, altos jefes de la Iglesia se pronunciaron por que fuera lo más amplia y completa posible. Fue notable, asimismo, la firmeza con que la izquierda sostuvo la necesidad de que se legalizara al Partido Comunista Español, hecho en el que también ejerció gran influencia la solidaridad de los partidos comunistas de Francia e Italia, cuyos secretarios generales, Georges Marchais y Enrico Berlinguer, se reunieron en Madrid, con Santiago Carrillo, los días 2 y 3 de marzo.

En lo que concierne a la actividad terrorista, se observaron dos fases: en la primera predominaron los atentados de que se hacía responsable la organización separatista vasca Euzkadi Ta Azkatasuna (ETA); en la segunda, además de las acciones terroristas de la ETA, menudearon los atentados contra personas de la izquierda por parte de organizaciones fascistas, así como secuestros sospechosos de figuras de derecha que, aunque atribuidos a una organización aparentemente de izquierda, en opinión de los especialistas de esta misma ideología, favorecían los propósitos de la ultraderecha para que interviniera el ejército y se frustrara el proceso democrático.

Finalmente, por lo que respecta a las relaciones exteriores, los hechos más destacados fueron el establecimiento de relaciones diplomáticas del Gobierno español con la Unión Soviética en febrero, y con México en marzo. México se negó siempre a reconocer al régimen de Francisco Franco y desde el fin de la Guerra Civil había mantenido relaciones con el Gobierno en el exilio de la República Española, que se disolvió a raíz de las elecciones.

Con las elecciones de junio culmina una primera parte del proceso de democratización. La verdadera fuerza de los partidos políticos no se conocerá mientras no hayan desaparecido los restos del franquismo en todas las instituciones y niveles de la administración. En este último aspecto se consideran de gran importancia las elecciones municipales, que deben efectuarse antes de que finalice el año.

Los problemas políticos y económicos que encara España son graves. Pero en medio de las dificultades ya reseñadas destaca un hecho: el pueblo español ha vuelto a descubrir la democracia. □